035981

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ, D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

ACCION DE HABEAS CORPUS PROMOVIDA POR JUAN JOSÉ RAMOS RIBES CONTRA JUZGADO QUINCE DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C. (RAD. 2013 00786 01).-

Bogotá D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece (2013).

ANTECEDENTES

MARTHA ELENA BALLESTEROS TOBAR actuando en nombre de JUAN JOSÉ RAMOS RIBES, en ejercicio de la acción constitucional de HABEAS CORPUS, actualmente recluso en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Picota, solicita se decrete su libertad, por encontrarse actualmente privado de la libertad, por haber cumplido ya la pena que le fue impuesta.

Fundamenta su petición en los hechos que se resumen a continuación:

- El señor JUAN JOSÉ RAMOS RIBES fue condenado por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Descongestión con funciones de conocimiento de Bogotá D.C. a 70 meses y 12 días de prisión mediante sentencia del 3 de julio de 2009.
- El 6 de abril de 2009 fue capturado, fecha a partir de la cual se encuentra descontando pena.
- Conforme a la Ley 65 de 1993 y la Resolución 2092 de 2006, el señor RAMOS RIBES, ha obtenido redención de pena así:

FECHA DE REDENCIÓN	JUZGADO	TIEMPO REDIMIDO
Febrero 21 de 2011	Juzgado 3 EPMS de Neiva	4 meses y 27.75 días
Noviembre 17 de 2011	Juzgado 15 EPMS de Bogotá	5 días
Marzo 9 de 2012	Juzgado 15 EPMS de Bogotá	29 días
Junio 21 de 2012	Juzgado 15 EPMS de Bogotá	3 meses 14 días
Agosto 28 de 2013	Juzgado 15 EPMS de Bogotá	4 meses y 26 días
Septiembre 17 de 2013	Juzgado 15 EPMS de Bogotá	1 mes y 15 días
TOTAL		15 MESES Y 27.75 DÍAS

- El Juzgado 15 de Ejecución de Penas y medidas de seguridad de Bogotá, recibió del INPEC certificado de cómputo de trabajos realizados por el interno en atención de expendio, pero ha dejado pendientes por redimir 840 horas, hasta tanto la cárcel envíe la justificación y programación semestral, conforme lo prevé el artículo 100 de la Ley 65 de 1993 y el parágrafo del art. 13 de la Resolución 2392 de 2006 expedida por el INPEC, según lo anota en otras determinaciones de los siguientes autos así:

AUTO INTERLOCUTORIO No.	FECHA	HORAS PENDIENTES POR REDIMIR
917	JUNIO 21 DE 2012	208
1223	AGOSTO 28 DE 2013	584
1388	SEPTIEMBRE 16 DE 2013	48
TOTAL		840 HORAS PENDIENTES POR REDIMIR

- La oficina jurídica de la Picota, hasta el 26 de septiembre no había enviado al Juzgado 15 de Ejecución de Penas el certificado de cómputo y conducta correspondiente al mes de agosto, a pesar de haberlo recibido de la Oficina de Registro y Control desde el 13 de septiembre y que certifica 160 horas trabajadas en telares y tejidos, completando así mil horas por redimir.
- La justificación de trabajo durante días laborados por el condenado señor Juan José Ramos Ribes domingos y festivos (entendiéndose el día domingo como festivo) está contenida en la misma resolución 2392 de 2006 del INPEC, que en su texto señala y autoriza en forma expresa el trabajo en días domingos y festivos para los reclusos en especial en las labores certificadas por el centro de reclusión como son "Atención de expendio", aunado a lo anterior desde el mes de agosto laboró 160 horas que a la fecha no han sido reconocidos y que el día 26 de septiembre se encontraba la certificación en la Oficina Jurídica de la Penitentiaria la Picota para remisión al Juzgado de ejecución de penas.
- Realizado el cómputo de tiempo reconocido por detención más redención y el laborado durante los días festivos y domingos (pendiente por redimir)

así como el laborado durante el mes de agosto y lo transcurrido en septiembre del presente año, encuentra que el condenado está en detención ilegal y privado de su libertad, pues a la fecha ya cumplió con la condena impuesta por la justicia colombiana.

- El cómputo es el siguiente: Tiempo de reclusión más tiempo de redención de pena reconocido sesenta y nueve meses y quince 75 días más 1000 horas de trabajo no reconocido por el despacho pero si certificado por el establecimiento carcelario sería un total de 72.5 días para un gran total de 71.18.25 días, es decir que a la fecha ya se excedió en el tiempo de ejecución de pena.
- No existe asidero jurídico para que la Juez de Ejecución de Penas solicite para efectos de redención la autorización por parte del centro carcelario y la justificación a la misma actividad en días festivos y dominicales toda vez que de la misma norma se desprende tal autorización y de las certificaciones emitidas por la autoridad carcelaria se indican las actividades que ejecutó día a día y de ellas se desprende la necesidad de permanecer en dicho trabajo todos los días del mes pues laboró en el expendio.

TRÁMITE EN ÉSTA INSTANCIA

Recibido el expediente se avocó el conocimiento y se dispuso librar oficio al Juzgado Quince de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, a efecto de que rindiera informe en relación con la situación descrita por el accionante y a efecto de que remitiera el expediente correspondiente al accionado (fl. 36).

El Juzgado Quince de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad accionado rindió el informe solicitado, indicando que en el presente asunto, el 5 de abril de 2009, el penado fue capturado por cuenta de estas diligencias y desde esa fecha se encuentra descontando pena; que por auto del 17 de septiembre de esta anualidad se resolvió petición de libertad siendo negada, decisión que no fue objeto de recursos de ley y que a la fecha no obra petición de libertad pendiente por resolver; que la Cárcel la Picota, ha remitido las autorizaciones respectivas para efectos de redención de la pena con motivo de trabajo, sin embargo, a su juicio, la autorización para laborar los festivos no comprende la

de los días domingo, por lo que no es factible redimir pena por dichos días, aunado a que no se sabe cuáles son los festivos que laboró y no siempre el trabajo es desempeñado por la misma persona; agrega que el 26 de septiembre se recibió proveniente del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Picota Oficio 05351, remitiendo certificado de cómputos reportando actividad de trabajo para el mes de agosto de 2013 equivalente a 160 horas y que sumado dicho tiempo con la pena descontada físicamente hasta el momento y redención de la pena arroja en total 69 meses y 28.75 días, lapso que aún dista del quantum total de la pena irrogada en su contra, faltándole aún 13 días; finalmente señala que las peticiones de libertad deben resolverse por el Juez natural y que no es el habeas corpus el mecanismo idóneo para ese efecto. (fls. 37-42)

En los términos establecidos por la Ley 1095 de 2006, el suscrito magistrado, procede a resolver previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La acción Habeas Corpus, tiene un referente constitucional directo en el artículo 30 de la norma superior que prevé:

“Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas”.

El *hábeas corpus* es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio *pro homine*.

Dicho mecanismo se estructura básicamente en dos eventos, a saber:

1. Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas o especies constitucional y legalmente previstas para ello, como son: con orden judicial previa (art. 28 C. Pol. 2° y 297 L. 906/04), flagrancia (arts. 345 L. 600/00 y 301 L. 906/04), públicamente requerida (art. 348 L. 600/00) y administrativa (C-025 enero 27/94), ésta última con fundamento directo en el artículo 28 de la Constitución y por ello de no necesaria consagración legal, tal como sucedió -y ocurre- en vigencia de la ley 600 de 2000.
2. Cuando ejecutada legalmente la captura la privación de libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la Carta Política o en la ley para que el servidor público (i)

lleve a cabo la actividad a que está obligado (escuchar en indagatoria, dejar a disposición judicial el capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc.), o (ii) adopte la decisión que al caso corresponda (definir situación jurídica dentro del término, ordenar la libertad frente a captura ilegal –arts. 353 L. 600/00 y 302 L. 906/04- entre otras). Providencia de 27 de noviembre de 2006, Rad. 26503 M.P. Alfredo Gómez Quintero.

Retomando la definición de la acción invocada, debe entonces precisarse que su finalidad se encamina a que el juez constitucional ejerza el control sobre la legalidad de la aprehensión del procesado. Así pues, está dentro del ámbito de su competencia determinar si dicha aprehensión o captura se encuentra dentro de los parámetros legales, o contrario sensu, fueron desconocidos por quienes la realizaron, o si a pesar de haberse ejecutado de manera legal se prolongó de manera ilícita la privación de la libertad, entendidos los anteriores puntos como captura ilegal y prolongación ilícita de la libertad.

Ahora bien, sea lo primero señalar, la acción de *Habeas Corpus*, solamente se circunscribe a la libertad impetrada, por cuanto al ser una acción meramente tutelar de la libertad, excluye argumentaciones que no estén dirigidas a tal efecto, sin embargo, es necesario advertir que el accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial dentro de la misma actuación penal para hacer valer sus derechos, presuntamente violados.

En el caso de autos, puede inferirse de lo afirmado por el promotor del habeas, la acción se adelanta por la supuesta prolongación ilícita de la privación de la libertad, por cuanto aduce el accionante que a la fecha ya excedió el tiempo de ejecución de pena a que fue condenado en razón de la redención de la misma. Así pues, remitió el Juzgado Quince de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, expediente perteneciente al aquí accionante, en el cual se puede evidenciar que el demandante ha elevado varias solicitudes de redención de la pena, tal como así lo describió en los hechos de la acción, última de ellas resuelta a través de proveído que data del 17 de septiembre de 2013 (fls. 353 a 356 del expediente perteneciente al proceso penal), siendo negada por llevar hasta esa fecha 69 meses y 8.75 días, lapso inferior a los 70 meses y 12 días a que fue condenado (fl. 355 del expediente perteneciente al proceso penal), a lo cuales, según el informe rendido por el Juzgado, deben sumarse 20 días por cuenta del certificado remitido por la Picota, que obra a folios 366 a 369 del expediente perteneciente al proceso penal), con lo cual acredita un total de pena redimida y cumplida físicamente, de 69 meses y 28.75 días, habiendo sido

condenado a una pena de 70 meses y 12 días (fls. 89 a 80 del expediente perteneciente al proceso penal)

Reseñado lo anterior, en principio resulta pertinente anotar, conforme al informe rendido por el accionado, y las actuaciones surtidas al interior del trámite, no se evidencia la vulneración aludida, como quiera que en el presente caso, todas las eventualidades o cuestiones alegadas que tengan que ver con la libertad del actor, posteriores a la legalización de la captura y más aún, con posterioridad a la condena impuesta (fls. 89 a 80 del expediente perteneciente al proceso penal), no pueden ser invocadas ni reconocidas a través de la acción de *Habeas Corpus*, pues el accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial previstos por el legislador que son efectivos, sin que pueda convertirse la acción constitucional en un instrumento de instancia. Sobre el punto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fallo de hábeas corpus proferido el 10 de abril de 2013, dentro del Radicado No. 41068, manifestó:

“De otra parte, se hace imperioso reiterar que una vez dirigida la acción constitucional a proteger a la persona de la privación ilegal de la libertad o de su indebida prolongación, al juez constitucional, en el examen puesto a su consideración, le está vedado incursionar en terrenos extraños a este específico tema, so pena de invadir órbitas que son propias de la competencia del juez natural al que la ley le ha asignado su conocimiento, pues de lo contrario desbordaría la naturaleza de su función constitucional destinada a la protección de los derechos fundamentales.

En otros términos, como de manera reiterada lo ha indicado la jurisprudencia de la Corte, la procedencia de esta acción se encuentra supeditada a que el afectado con la privación ilegal de la libertad, o con su ilícita prolongación, haya acudido primero a los medios previstos en el ordenamiento legal dentro del proceso que se le adelanta, pues, se reitera, lo contrario conllevaría a una injerencia indebida sobre las facultades que son propias del juez que conoce de la causa.

Al respecto la Corte ha dicho:

*“Evidentemente la acción de habeas corpus fue concebida como una garantía esencial cuyo ejercicio de carácter informal, en principio demanda el estudio de cualquier situación de hecho que indique la privación de la libertad sin la existencia de una orden legalmente expedida por la autoridad competente, pero de manera alguna implica su uso indiscriminado, esto es, la **pretermisión de las instancias y los mecanismos judiciales ordinarios**, pues ella se encuentra instituida como la última garantía fundamental con la que cuenta el perjudicado para restablecer el derecho que le ha sido conculcado.*

“Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala ha sido consistente en determinar que la procedencia excepcional de la acción de habeas corpus debe responder al principio de subsidiaridad, pues roto éste por acudir primariamente a dicha acción desechando los medios ordinarios

a través de los cuales es posible reclamar la libertad con fundamento en alguna de las causales contempladas en la ley, aquella resulta inviable”.¹

Sobre el mismo tema, la jurisprudencia de la Sala precisó:

“El núcleo del habeas corpus responde a la necesidad de proteger el derecho a la libertad. Pero cuando la misma ha sido afectada por definición de quien tiene la facultad para hacerlo y ante él se dan, por el legislador diferentes medios de reacción que conjuren el desacierto, nadie duda que el habeas corpus está por fuera de este ámbito, y pretender aplicarlo es invadir órbitas funcionales ajenas. Su inmediatez, su perentoriedad, su efecto indiscriminado, al punto que no hay fuero o especialidad de competencia en el cual no incida, no impone ni auspicia el que se le haga actuar en donde no es el radio de su intervención”.²

Más adelante ahondó de la siguiente manera:

“Cuando la libertad personal, que se considera violada, ha sido afectada en virtud de una decisión judicial dentro de un proceso penal, conforme a criterio de esta Sala, el cual igualmente fue indicado por la Corte Constitucional en sentencia C-301 de 1993, la acción de habeas corpus se torna improcedente, ateniendo que es el mismo proceso penal el que provee de mecanismos a las partes para restablecer este derecho, entre los que se menciona el control de legalidad, si se trata del procedimiento previsto en la ley 600 de 2000, la interposición de recursos contra la decisión que impone la privación de la libertad o su limitante, e igualmente, cuando de vulneración al debido proceso se trata, la solicitud de nulidad que se invoca ante el funcionario judicial que adelanta el proceso, en los términos previstos en el artículo 306 y siguientes de la ley aludida, a menos que se incurra en una vía de hecho” (la Sala subraya en esta oportunidad)³.

“(iii) No es viable confundir la naturaleza jurídica de la petición de libertad provisional con el ejercicio de la acción de habeas corpus, pero lo cierto es que, precisamente dentro de la comprensión del derecho fundamental al debido proceso, argumentos jurídicos y de razón práctica permiten colegir que antes de acudir a los mecanismos constitucionales o legales de protección de los derechos, su reclamación debe efectuarse, siempre que ello sea posible, al interior de las actuaciones ordinarias, todo lo cual dota al proceso penal de unos mínimos de coherencia, reconoce su progresividad y a la vez, proscribire la posibilidad de eventuales decisiones contradictorias de la jurisdicción sobre una misma temática⁴.

En otras palabras, si bien es cierto que el habeas corpus no necesariamente es siempre residual y subsidiario, también lo es que cuando existe un proceso judicial en trámite no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades:

¹ Radicación 28747, sentencia del 15 de noviembre de 2007.

² Radicación 14153, sentencia del 27 de septiembre de 2000. Ver también rad. 27577, auto del 29 de mayo de 2007; rad. 28065, auto del 8 de agosto de 2007; rad. 28142, auto del 15 de agosto de 2007; rad. 28228, auto de 29 de agosto de 2007, entre otros.

³ Rad. 28598, auto del 23 de octubre de 2007.

⁴ Rad. 28993, sentencia del 19 de diciembre de 2007.

i) Sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; iii) desplazar al funcionario judicial competente; y iv) obtener una opinión diversa -a manera de instancia adicional- de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas⁵.

Por lo tanto, a partir del momento en que se impone la medida de aseguramiento, todas las peticiones que tengan relación con la libertad del procesado deben elevarse al interior del proceso penal, no a través del mecanismo constitucional de habeas corpus, pues, se reitera, esta acción no está llamada a sustituir el trámite del proceso penal ordinario.

Ello es así, excepto si, como lo reiteró la Corte en el auto del 26 de junio de 2008, la decisión judicial que interfiere en el derecho a la libertad personal puede catalogarse como una vía de hecho o se vislumbra la prosperidad de alguna de las otras causales genéricas que hacen viable, la acción de tutela; hipótesis en las cuales, "aún cuando se encuentre en curso un proceso judicial, el habeas corpus podrá interponerse en garantía inmediata del derecho fundamental a la libertad, cuando sea razonable advertir el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garantía de la libertad a que antes se resuelvan los recursos ordinarios"⁶.

Conforme a lo anterior, forzosamente debemos concluir que la solicitud de libertad que ahora se eleva, con fundamento en la falta de redención de la pena y específicamente por el trabajo prestado en días domingos y festivos, no es una controversia que pueda ser debatida en el presente trámite, y en ese orden, la pretensión elevada abiertamente improcedente, como quiera que para ello, debe el accionante acudir a los instrumentos estatuidos en las normas procesales que rigen la materia, por no ser la acción de habeas corpus un mecanismo principal al que se pueda acudir para sustituir las competencias exclusivas del Juez natural.

De tal manera, puede concluirse que la actuación adelantada al interior del trámite, se encuentra conforme a la ley, no observándose irregularidad alguna que permita deducir afectación al derecho de libertad del capturado y menos aún que se encuentre en situación de prolongación ilícita de la libertad.

Por todo lo anterior no prosperan las argumentaciones y razonamientos del peticionario por lo que se declarará la improcedencia de la Acción Pública de

⁵ Ver, entre otros, auto de habeas corpus del 26 de junio de 2008, radicado No. 30.066

⁶ Ibidem

Habeas Corpus incoada por **MARTHA ELENA BALLESTEROS TOVAR** en nombre de **JUAN JOSÉ RAMOS RIBES**.

En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Laboral, constituida en Juez individual:

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE por las razones expuestas en la parte motiva de éste proveído, el amparo constitucional de habeas corpus invocado **JUAN JOSÉ RAMOS RIBES**.

SEGUNDO: Notifíquese personalmente al accionante **JUAN JOSÉ RAMOS RIBES**, líbrese telegrama a **MARTHA ELENA BALLESTEROS TOVAR** quien actuó en nombre del **JUAN JOSÉ RAMOS RIBES**, líbrese oficio al accionado adjuntando copia de la providencia, informando que contra la presente providencia procede el recurso de *impugnación*, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su notificación, como lo dispone el artículo 7° de la Ley 1095 de 2006.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

Magistrado